

Así son los diez desafíos económicos que pondrán a prueba la resistencia de Sánchez

El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2020 será un examen determinante

Carmen Obregón MADRID.

El Gobierno de coalición que se avcina, con la presidencia de Pedro Sánchez, en nombre del Partido Socialista, y con Podemos de socio prioritario, se enfrenta a un año lleno de difíciles retos económicos e incluso de difíciles retos contrapuestos entre las distintas formaciones. De momento, Sánchez comienza 2020 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, y con pensiones, salario mínimo y el sueldo de los funcionarios sin actualizar. Por eso, el primer gran reto económico serán unas Cuentas Públicas que, por primera vez, tendrán que tener en cuenta la entrada en vigor del artículo 135.2 de la Constitución que obliga a que todo proyecto presupuestario tenga que adaptarse a las cifras estipuladas por la Comisión Europea.

Con este planteamiento, el Presupuesto que en su día diseñaron en febrero de 2019 PSOE y Unidas Podemos, presupuestos frustrados por la mayoría del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se encontrará de bruces con el primer gran obstáculo de la legislatura. Y es que Bruselas ya contestó a España que dudaba de su capacidad recaudatoria, que cuadruplicaba el gasto público y que además incumplía la meta de déficit.

Pero la advertencia de Europa no ha hecho mella en la idea primigenia que tiene el primer Gobierno de coalición de España, esta vez formado por socialistas y comunistas. En su acuerdo, mantienen un impuesto sobre negocios digitales, subida del Impuesto de Sociedades, gravamen al diésel, incremento de Patrimonio a las grandes fortunas, subida del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, con un cálculo de recaudación de entre 5.654 millones y 6.654 millones de euros, a todas luces, insuficiente.

En una cara de la moneda, los acuerdos económicos alcanzados con el resto de partidos que harán posible que Pedro Sánchez siga en La Moncloa, en principio, siembran incertidumbre sobre las posibilidades de unas Cuentas públicas ajustadas al déficit, tal y como exige la Comisión Europea.

De la otra cara, el incumplimiento de las promesas selladas con las fuerzas políticas no garantiza que esas Cuen-

tas salgan adelante en el momento en que se vean frustrados esos compromisos, máxime cuando se aprecie una descompensación económica territorial y el principio de solidaridad salte por los aires.

Asegurarse dos años de poder

Lo que sí parece evidente es que, de superar este reto, sin enmiendas a la totalidad, el Gobierno habrá aprobado un examen decisivo y determinante para asegurarse al menos dos años en el poder. Porque, de otra forma, Sánchez volvería a la casilla

El dirigente del PSOE tendrá que bregar con muchos partidos para aprobar sus reformas

de febrero de 2019, cuando no habiendo aprobado los Presupuestos de ese año, se vio empujado a convocar elecciones el 28-A.

Otro de los grandes compromisos del Ejecutivo de Sánchez es el desarrollo de la Ley del Cambio Climático, cuya dotación económica quedó fijada por el presidente en

un gasto de 235.000 millones de euros en diez años. Ya en los Presupuestos fallidos de 2019 reflejó un aumento del 5,1 por ciento, con respecto a 2018. La Ley estará ligada al futuro de las Cuentas. Si no, quedará en papel mojado.

La visión ecologista

Complicada se antoja la implantación del Banco de Inversión Pública para la Transición Tecnológica. La idea, original de Podemos, de contar además con un Ministerio, enfrentaría a PSOE y Unidas Podemos con el PNV, preocupado por la reforma del mercado eléctrico, teniendo en cuenta que la empresa vasca Iberdrola es una de las grandes contribuyentes a la Hacienda foral vasca.

Los jeltzales desconfían de la experiencia y de la pericia de los de Iglesias en esta y en otras materias como el fin del diésel, que para Unidas Podemos tendría que ser para 2025, con las consecuencias negativas que esa medida puede tener sobre las empresas de componentes de automoción, uno de los sectores empresariales más potentes del País Vasco.

La reforma laboral será otro escollo en el camino. Las formaciones parlamentarias están muy divididas. El PSOE quiere cambiar los aspectos más lesivos, el PNV también, pero no coincide necesariamente con los postulados de Unidas Podemos, que quieren directamente derogar la reforma. Además, en el juego entra un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que habrá de ser consensuado por los agentes sociales si el Gobierno actúa con transparencia así como la diatriba de no acometer una subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) por la puerta de atrás.

Entre tanto, con las pensiones congeladas, el SMI y los sueldos de los funcionarios también, al menos mientras el Gobierno esté en funciones, el futuro ejecutivo socialcomunista quiere promover el régimen especial de autónomos -donde es previsible que encuentre los acuerdos del arco parlamentario del centroderecha, para que los autónomos coticen en función de sus ingresos reales con mayor cartera de servicios sociales. Distinto será endurecer el régimen sancionador para las empresas morosas.

Banco de Inversión Pública para la Transición Tecnológica. Podemos ya ha dicho que las empresas condenadas por corrupción, deberán devolver las subvenciones recibidas.

Reforma laboral. En este debate, PSOE y Unidas Podemos discrepan. Los primeros quieren que derogan los "aspectos lesivos", los segundos quieren otra ley laboral.

Régimen especial de autónomos. PSOE y Podemos han pactado la reforma del sistema de cotización de los autónomos para vincularlo a los ingresos reales.

Ley del Cambio Climático. Una de las tareas del nuevo Gobierno será la Ley del Cambio Climático, uno de los puntos coincidentes en materia ambiental entre PSOE y Podemos.

Actualización de las pensiones al IPC. Por segunda vez consecutiva, como José Luis Zapatero en 2011, el Gobierno socialista de Sánchez ha congelado las pensiones.

Presupuestos Generales del Estado. Es la principal prioridad del nuevo Ejecutivo. Con más gasto social, el Gobierno necesitará de más ingresos.

Nuevo Estatuto de los Trabajadores. Sánchez quiere un Estatuto de los Trabajadores para anticiparse al cambio del modelo productivo y de relaciones laborales

El alquiler de la vivienda. Pablo Iglesias ha dicho que quiere poner límites a los fondos buitres y a la escalada del precio del alquiler. "Será un objetivo del próximo Gobierno", sostiene.

Salario Mínimo Interprofesional. El PSOE se ha comprometido a subir el SMI a 1.200 euros al final de la legislatura. De momento, el Gobierno en funciones ha congelado las subidas.

Régimen sancionador para las empresas morosas. El régimen sancionador para las empresas que se demoren en sus pagos es uno de los objetivos prioritarios de Calvo.